



ÁREA DE MEDIO AMBIENTE, ECOLOGÍA Y SOSTENIBILIDAD

Boletín N.º 1

#DíaDeLaTierra

PODEMOS.

La tierra es mortal. Tuvo que emprender desgraciadamente un largo camino la Humanidad para ser consciente de esta dramática revelación. No, la tierra no es ese contenedor infinito donde se reproducía una y otra vez la locura de una voluntad incapaz de comprender sus límites; no es ese sostén que siempre iba a dar calor y refugio en su seno protector. Si una lección crucial del siglo xx fue advertir que ese gran hogar necesitaba cuidado urgente, el gran reto del **xxi** pasa por aprender en y sobre la sostenibilidad. Cuidar de la tierra es cuidar de lo humano, ni más ni menos. En el plano ecológico no nos ha sido regalada la gracia de asaltar los cielos.

Este es el objetivo principal de nuestro boletín: hacernos y hacerte reflexionar acerca de los límites que sobrepasamos en la explotación de los recursos naturales, así como acerca de la gran voluntad y acción política que nos queda por recorrer para mantener su conservación.

Esperamos ser un espacio de reflexión y debate sobre ello, de manera humilde y colectiva porque una cosa que tenemos bien presente es que es una cuestión de todos y todas el conseguirlo.

Germán Cano. Miembro del Área de Cultura del Consejo Ciudadano Estatal.

M.^a del Carmen Romero. Responsable del Área de Medio Ambiente, Ecología y Sostenibilidad del Consejo Ciudadano Estatal.

COLABORADORES DEL BOLETÍN N.º 1:

Área de Medio Ambiente, Ecología y Sostenibilidad

Fernando Prieto. Doctor en Ecología, director del Observatorio de Sostenibilidad y colaborador del Área de Medio Ambiente, Ecología y Sostenibilidad

Daniel Liceras. Experto en residuos y colaborador del Área de Medio Ambiente, Ecología y Sostenibilidad

Teresa García. Doctora Ingeniero Agrónomo y responsable de Medio Ambiente y Medio Rural del Consejo Ciudadano de Andalucía

Beatriz González. Doctora en Geología y responsable de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Consejo Ciudadano de Asturias

Ignacio Marinas. Ingeniero de Caminos

Fernando Prieto. Doctor en Ecología y miembro del Círculo 3E

Manuel Carrero. Doctor en Arquitectura y miembro del Consejo Ciudadano de Asturias

Esther López. Responsable del Área de Medio Ambiente del Consejo Ciudadano de la Comunitat Valenciana

M.^a del Carmen Romero. Responsable del Área de Medio Ambiente, Ecología y Sostenibilidad del Consejo Ciudadano Estatal

Estefanía Torres. Eurodiputada de Podemos y miembro del ENVI (Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria)

Ariel Jerez. Consejero estatal coordinador del Consejo del Mundo Rural y Marino de Podemos

Fernando Fernández. Miembro del Consejo Editorial de la revista *Soberanía Alimentaria* y asesor del CMRM y el GP de Podemos en el Congreso

Concha Salguero. Miembro de la Plataforma por la Ganadería Extensiva y el Pastoralismo

Alejandro Moruno Danzi. Nutricionista colaborador en el Consejo del Mundo Rural y Marino de Podemos

ÁREA DE MEDIO AMBIENTE, ECOLOGÍA Y SOSTENIBILIDAD

Boletín N.º 1

ÍNDICE

CAMBIO CLIMÁTICO, BOSQUES Y RESIDUOS

Artículos de opinión _____ 4

1. Bosques del siglo xxi: por un futuro
forestal sostenible _____ 5

2. La lucha contra el cambio climático:
por un futuro sostenible _____ 6

3. ¿Residuos o materias primas
enmascaradas? _____ 7

4. La gestión del agua, clave de
nuestro futuro _____ 8

5. Solidaridad territorial en España:
por una ordenación ecológica
y territorial _____ 10

6. Por un cambio de modelo de ciudad _____ 12

7. Biodiversidad: decálogo de los retos
en su protección _____ 13

8. Principal reto de la educación
ambiental _____ 14

MUNDO RURAL

Artículos de opinión _____ 16

1. Nuevos tiempos de salitre y olas _____ 17

2. La Ley de Desarrollo Sostenible para
el mundo rural _____ 18

3. Tierra para la vida. Tierra para quien
la trabaja _____ 19

4. Necesitamos establos, pero también
pastores _____ 20

5. Cadena y calidad alimentaria _____ 21



CAMBIO CLIMÁTICO, BOSQUES Y RESIDUOS

Artículos de opinión



Bosques del siglo XXI: por un futuro forestal sostenible

*Reflexión del equipo del Área de Medio Ambiente,
Ecología y Sostenibilidad de Podemos*

En este siglo los ecosistemas forestales aparecen amenazados por nuevos factores mientras no se acaba de conjurar los del siglo pasado y aparece, de forma nítida y contundente, el cambio climático como eje vertebrador del nuevo escenario que va a modificar sustancialmente la vida en nuestras altitudes, empezando por el agua. Desde la publicación del último informe IPCC y de la conferencia COP21 donde 195 países abordaron el tema es evidente que tenemos que considerar el cambio climático. Además la península ibérica, debido a su posición cercana al continente africano, y con un clima mediterráneo y árido en el 80 % de su superficie, es particularmente vulnerable al cambio climático, por lo que deben acometerse ya directamente acciones de adaptación al nuevo escenario de cambio climático. La gestión forestal sostenible basada en la mejor ciencia disponible es la pieza clave.

Debido a la enorme inercia de los ecosistemas forestales, donde un bosque maduro puede tardar en crecer y formarse varios cientos de años y en cambio su desaparición por cortas o incendios ocurre en tan solo en unos minutos, el marco general debe ser el principio de precaución o cautela. La gestión debe ser multifuncional, e integral, considerando como pieza clave al hombre y sus usos tradicionales, especialmente en sistemas altamente intervenidos como dehesas, sotos o pinares pastoreados. Por otra parte debe basarse en la sostenibilidad, las extracciones de recursos forestales no deben ser superiores a las tasas de renovación. Además de la madera, la leña, la miel, la caza y otras producciones, se incluye el paisaje como recurso. Una tala a matarrasa no impediría la renovación de la masa forestal pero imposibilitará disfrutar del mismo paisaje, en ocasiones cientos de años. Un porcentaje de al menos el 15 %, de las superficies sometidas a



aprovechamiento forestal debe mantenerse intacto como refugio de especies y sus hábitats. Conviene tomar medidas de conservación y de gestión específicas para bosques maduros y viejos, masas con especies muy amenazadas, sistemas de matorrales y pastos de especial valor ecológico y árboles monumentales. Las especies exóticas deben limitarse y controlarse, evitando que invadan o sustituyan ecosistemas de más calidad. Hay que diferenciar claramente entre cultivos forestales y bosques. Las repoblaciones están fuera de lugar si ocupan masas con mayor grado de madurez y biodiversidad. El agua debe ser uno de los ejes de la gestión forestal en un país como el nuestro, con predominio de clima mediterráneo. Sin embargo este binomio no ha sido suficientemente tenido en cuenta. Aunque las competencias en estos dos recursos tan estratégicos están repartidas entre las Administraciones central y autonómica, la gestión conjunta debe ser un objetivo político de primer orden. Es necesaria una gestión forestal sostenible basada en la mejor ciencia disponible para los ecosistemas forestales de este siglo XXI.

La lucha contra el cambio climático: por un futuro sostenible

Fernando Prieto

Doctor en Ecología, director del Observatorio de Sostenibilidad
y colaborador del Área de Medio Ambiente, Ecología y Sostenibilidad

Las evidencias de cambio climático se acumulan. 2015 ha sido el año con las temperaturas más altas desde que existen registros, según la NASA. La Oficina Meteorológica Mundial pronostica que 2016 será un año todavía más caluroso y los meses que ya llevamos del año así lo confirman.

En España también se acumulan las evidencias: inviernos cálidos, incendios en el norte en diciembre, efectos sobre las estaciones de esquí que han visto reducida su capacidad a casi la mitad, efectos graves sobre la agricultura, etc. Sabemos que España es especialmente vulnerable; y muchos sectores, desde la agricultura al turismo, los servicios en las ciudades, las costas o la biodiversidad están especialmente expuestos.

En París hace unos meses casi 200 países establecieron los mínimos para avanzar en este grave problema que todos los países calificaron como el gran reto de la humanidad del siglo XXI.

Mientras, aquí no solo no se han hecho los deberes, sino que somos de los últimos en Europa en cumplir nuestros compromisos, según informes de la AEMA de 2014. España ocupa el último lugar de toda Europa en cuanto a reducción de emisiones totales y el penúltimo en porcentaje de reducciones. Todo

esto contando con la grave crisis económica. Los partidos gobernantes nos han colocado en el último lugar con el modelo productivo aplicado y además han puesto en marcha planes de asignación que han be-

neficiado a los que más contaminaban, como petroleras, cementeras o energéticas, en una nueva forma de aplicar la política ambiental. Los datos de 2015 indican un repunte en las emisiones de un 4 %.

En este contexto, es imprescindible un gran pacto ambicioso contra el cambio climático basado en los conocimientos científicos existentes. Y no solo los partidos, sino también las organizaciones empresariales, los sindicatos y la sociedad civil. La absurda dicotomía «o elevadas emisiones o crecimiento de la economía» ya ha sido totalmente superada, todo el mundo entiende que menores emisiones implican mayor progreso y más sostenibilidad. La propuesta de acuerdo que podría articularse en una ley contra el cambio climático tendría que tener una serie de líneas mínimas: el compromiso de limitar las emisiones, planes adecuados y realistas de adaptación al cambio climático, apoyo a las renovables con retribuciones justas (ni las exorbitadas ofrecidas por el PSOE ni las inexistentes —que han endeudado a las familias y bancos, han destruido el sector empresarial y de I+D— ofrecidas por el PP), permitir la energía distribuida y el autoabastecimiento (en las elecciones todos los partidos excepto el PP lo proponían), cierre paulatino de las minas de carbón ofreciendo alternativas a los trabajadores, la prohibición del *fracking*, actuaciones para cambiar la distribución modal del transporte, sobre todo el ferrocarril.

En resumen, avanzar con propuestas sólidas para el tránsito hacia una economía baja en carbono.

Compromiso de limitar las emisiones; planes adecuados y realistas de adaptación al cambio climático; apoyo a las renovables con retribuciones justas

¿Residuos o materias primas enmascaradas?

Daniel Liceras

Experto en residuos y colaborador del Área de Medio Ambiente,
Ecología y Sostenibilidad

Episodios de contaminación del aire en las ciudades, degradación de las masas de agua, vertido de más del 50 % de los residuos generados en vertederos, ruido, mucho ruido, contaminación de los suelos... algo estamos haciendo mal.

Desde que allá por los años 70 comenzó a hablarse de los límites del planeta hasta hoy, la sociedad civil se ha dado cuenta de que existe un grave problema con la contaminación que sufre el planeta y España en particular.

En este marco de degradación, la generación de residuos y su modelo de gestión están hoy en el centro del debate debido a que en la actualidad España no cumple con la tres directivas más importantes de residuos —la Directiva Marco de Residuos, la de vertederos y la que versa sobre embalajes—, lo cual es un verdadero problema que ni el PP ni el PSOE han sabido reconducir durante más de 40 años de democracia. España, con un 60 % de vertido, un 10 % de valorización energética y un 30 % de reciclado, se sitúa en la mitad de la tabla de países europeos. El nivel de reciclado se sitúa por debajo de la media europea —el 42 % en Europa y el ya comentado 30 % en España—. El problema fundamental es la generación de residuos, seguido por la excesiva dependencia del vertido.

La Unión Europea ha marcado el camino del cambio de una economía lineal, es decir, la que extrae de la Tierra recursos para enterrar residuos hacia un modelo circular, más respetuoso con el planeta en el que los residuos no son tal, sino que son materiales susceptibles de recuperarse para transformarse en nuevos productos. Y este es el gran reto de los residuos: la reducción. Así, nuevas herramientas, como el ecodiseño de productos y servicios, son fundamentales para rediseñar el futuro hacia un planeta con menos resi-

duos, con una sociedad que reduzca la presión sobre los recursos naturales porque es capaz de recuperar muchos materiales de los productos que desecha.

Otro gran reto para reducir los impactos que los residuos generan sobre el planeta, por lo ya comentado, es incrementar la calidad de las materias primas —constituyentes de los residuos— obtenidas de los productos desechados. Teniendo en cuenta que el Magrama trabaja con el dato de que el 48 % de los residuos municipales generados en España corresponde a la materia orgánica, parece razonable pensar que uno de los grandes retos es la recogida selectiva de esta fracción orgánica.

Si el 48 % es materia orgánica, el 52 % restante es materia inorgánica sobre la que puede actuar el ecodiseño para mejorar sus opciones de reciclaje. Sin embargo la elección de una buena recogida selectiva de esta fracción inorgánica debe mejorarse para alcanzar resultados acordes con un país desarrollado. Por ello hemos entrado ya en el tiempo de repensar los sistemas integrales de gestión de residuos en el ámbito municipal para dejar de ser de productos y pasar a ser de materiales, que es en definitiva lo que se recicla.

Y este es el gran reto de los residuos: la reducción



La gestión del agua, clave de nuestro futuro

Teresa García

Doctora Ingeniero Agrónomo y responsable de Medio Ambiente
y Medio Rural del Consejo Ciudadano de Andalucía

Beatriz González

Doctora en Geología y responsable de Medio Ambiente
y Desarrollo Rural del Consejo Ciudadano de Asturias

La gestión sostenible de nuestros recursos hídricos, para cubrir las necesidades de los ecosistemas acuáticos y de la población actual, en primer lugar para abastecimiento urbano, y en segundo lugar para las actividades productivas, al mismo tiempo que se preservan en calidad y en cantidad para las generaciones futuras, es uno de los grandes retos a los que se enfrenta nuestro país. Ese reto, que ha marcado la historia de nuestro siglo xx desde el regeneracionismo de Joaquín Costa hasta la política de pantanos y trasvases de Franco, se vuelve aún más complejo en el actual escenario de cambio climático, con un ya constatable aumento de los eventos extremos, sequías e inundaciones y una reducción probable de los recursos globales disponibles.

En Podemos, defendemos que en ese contexto, ninguna cuenca puede ser considerada excedentaria, y por lo tanto es inviable basar el futuro en nuevos trasvases. El cumplimiento de la Directiva Marco del Agua, que busca garantizar el buen estado ecológico de todas las masas de agua superficiales y subterráneas, obliga a redimensionar la expectativa realista de caudales y a abrir procesos de diálogo entre cuencas y comunidades afectadas que permitan diseñar planes de futuro viables y consensuados. Creemos que es fundamental poner en marcha procesos de diálogo por parte de todos los sectores, colectivos y territorios implicados en conflictos del agua para identificar alternativas negociadas y soluciones de consenso en base a una amplia participación social, incluyendo conflictos en torno a embalses y trasvases.

A pesar de la evidencia de que nuevos trasvases y embalses no son hoy la solución, por el

rechazo social que suscitan, por su elevado coste de inversión, y por sus graves impactos medioambientales, los planes hidrológicos aprobados a finales de 2015 para el ciclo 2015-2021 siguen contemplando en sus programas de medidas, principalmente obras hidráulicas a la antigua usanza, destinadas a incrementar la oferta de agua y no a resolver las graves deficiencias que presentan la mayor parte de nuestras masas de agua para alcanzar el buen estado que persigue la Directiva Marco del Agua. Así se lo ha hecho saber ya la Comisión Europea al Gobierno de España, con la apertura de un expediente de investigación.

Frente a esas medidas que mantienen la inercia de la vieja política hidráulica, defendemos la paralización de los proyectos de construcción de grandes infraestructuras hidráulicas (presas y trasvases) y el desarrollo de sistemas alternativos de abastecimiento para momentos de escasez; la revisión de la situación y utilidad real de los embalses, trasvases y otras infraestructuras ya construidas para adecuar su funcionamiento a la Directiva Marco del Agua. En el caso del trasvase Tajo-Se-gura, creemos fundamental garantizar las necesidades de los recursos hídricos de la cuenca del río Tajo y poner en marcha una transición hacia un modelo más sostenible. En las cuen-

*Defendemos que
en ese contexto,
ninguna cuenca
puede ser considerada
excedentaria, y por lo
tanto es inviable basar
el futuro en nuevos
trasvases*



cas beneficiarias de esos trasvases, la gestión de la demanda agraria, urbana e industrial y la optimización de los recursos no convencionales (reutilización de aguas residuales y desalación marina) constituyen piezas clave en esa transición hacia horizontes más sostenibles. La utilización al máximo de las desaladoras ya existentes, el uso de energías renovables para su funcionamiento y la sustitución en zonas costeras del agua para uso industrial y para el abastecimiento procedente de trasvases por agua desalada deben complementar la gestión de la demanda, prioritaria.

Desde el punto de vista no ya de la cantidad, sino de la calidad de nuestras aguas, es urgente poner en marcha un plan de choque de inversión en depuración de aguas residuales, que nos ponga al día con la normativa europea y evite sanciones, pero sobre todo que

mejore la calidad de nuestros ríos y litorales, y además cree empleo.

Al mismo tiempo, defendemos la puesta en marcha de un plan ambicioso de pedagogía social y, en el caso del regadío (el gran consumidor de agua en nuestro país), de formación y transferencia de tecnología, para el uso sostenible del agua, centrado en temas claves, no retóricos, con objetivos, calendarios y mecanismos concretos de evaluación de resultados.

Pero por encima de todo ello está la consideración del derecho al agua como un derecho humano, que exige la aplicación inmediata por parte del próximo Gobierno, de medidas para la detección y erradicación de la pobreza hídrica, que afecta hoy a un inadmisiblemente 20 % de la población española.

Solidaridad territorial en España: por una ordenación ecológica y territorial

Ignacio Marinas y Fernando Prieto

Expertos en ordenación del territorio y ecología, y miembros del Círculo 3E

UNA NUEVA PERSPECTIVA PARA DEBATIR LA SOLIDARIDAD TERRITORIAL

En el marco de una economía global la condición previa de sostenibilidad para los pueblos es que se aseguren los procesos de desarrollo local y que una parte de la formación de capital —en medios de producción sostenibles, en infraestructuras, en servicios, en recursos humanos y en la calidad del medio— se mantenga e incremente en cada territorio.

Para ello el análisis territorial ha de elaborar mejores indicadores que el PIB, la renta o el equipamiento de infraestructuras; por ello es necesario avanzar más allá del PIB, midiendo el acceso del capital humano a las oportunidades de realización personal, la conservación del medio, la desigualdad, y el desarrollo de las culturas autóctonas como ejes en los que basar la solidaridad, la calidad de los servicios o el mantenimiento adecuado de las infraestructuras, lo que en definitiva significará medir para mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas. Los poderes públicos deben buscar el bien común en el

uso y la ocupación del suelo (buscando, a su vez, el interés general) e impedir la especulación.

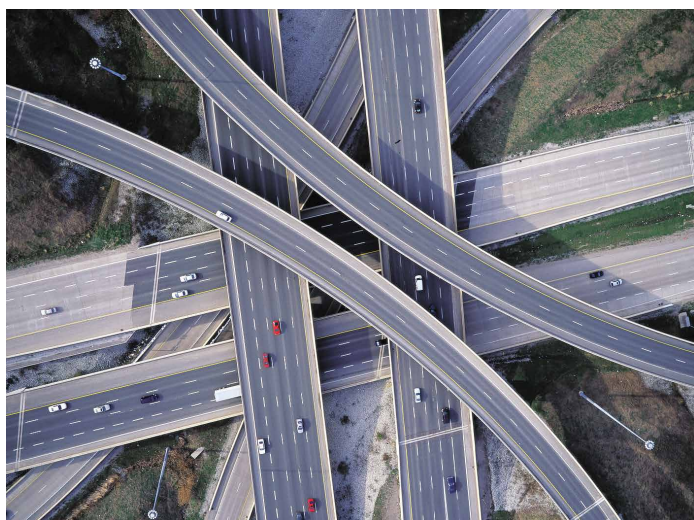
El urbanismo y la planificación son una función social y pública, y sobre todo política, pero debe basarse en las potencialidades del territorio salvaguardando los ecosistemas más escasos para las generaciones futuras, y estableciendo cada categoría de ocupación del suelo en el mejor sitio posible.

LA SITUACIÓN HEREDADA

Las infraestructuras y el desarrollo urbano están llenas de malas prácticas contra la solidaridad interterritorial y el medio ambiente. Se suceden los ejemplos de infraestructuras fuera de contexto y sobredimensionadas. Las radiales de Madrid, la autopista Murcia-Vera, las docenas de aeropuertos infrautilizados. La burbuja inmobiliaria también era de infraestructuras. La burbuja de los aeropuertos, el AVE, la injustificada construcción de autopistas en concesión que hay que rescatar y la excesiva sobrecapacidad portuaria chocan con el desmantelamiento directo de las infraestructuras ferroviarias para mercancías que obligan a ir por carreteras. Pese a todo ello el transporte de personas y mercancías sigue yendo, mayoritariamente, por carretera (carreteras que también están sobredimensionadas), y sobre todo en vehículo privado.

PRINCIPALES OBJETIVOS PARA CONSEGUIR UNA SOLIDARIDAD TERRITORIAL

El objetivo de restaurar y vertebrar el país: este gran plan incluirá grandes ejes de solidaridad para el país basado en la ingeniería ecológica, la planificación, las soluciones basadas en la naturaleza aplicando la mejor ciencia





disponible y, como ya se ha dicho, buscando la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y teniendo en cuenta el cambio climático y la biodiversidad.

Se potenciará la gestión de la demanda y no la realización de nuevas infraestructuras como ha sucedido hasta ahora; se fomentará la **intermodalidad** entre el ferrocarril y los puertos con la idea de impulsar el transporte de ferrocarril de mercancías; en infraestructuras se gestionará, de forma eficiente y sostenible las infraestructuras existentes y, sobre todo, los servicios públicos que sobre ellas se prestan, introduciendo obligatoriamente códigos de buenas prácticas ambientales en la gestión del tráfico y del transporte.

Se impulsará un **plan de depuración** de todas las aguas residuales y de recuperación de la calidad ecológica de las masas de agua;

y se realizarán **infraestructuras verdes**, que aseguren la conectividad ecológica entre diferentes zonas protegidas y con las zonas ecológicas de interés.

Por ello se trata de poner en común las diversas opiniones, con el propósito de consensuar un proceso de trabajo interdisciplinar, que nos permita avanzar **en un ambicioso proyecto** en los procesos de vertebrar España con nuevos criterios de evaluación del desarrollo territorial más justo y solidario, para desarrollar un programa de trabajo a medio y largo plazo, a diferentes escalas, municipal, regional y estatal.

Por un cambio de modelo de ciudad

Manuel Carrero de Roa

Doctor en Arquitectura y miembro del Consejo Ciudadano de Asturias

A principios de este siglo alrededor de cuatro millones y medio de personas en España vivían en barrios vulnerables por su elevada tasa de paro, el bajo nivel de estudios o las deficiencias de sus viviendas, y ese número no ha hecho sino crecer en los últimos años. Solo el consumo energético en la vivienda y la urbanización suman el 8,5 % de nuestra huella ecológica. Nuestro parque residencial incluye casi tres millones de viviendas vacías y más de medio millón de viviendas nuevas sin vender, resultado de la brutal especulación inmobiliaria que ha originado una recesión económica sin precedentes, robando el trabajo y el futuro a mucha (demasiada) gente.

Proponemos un nuevo urbanismo que ocupe el lugar que le corresponde en la agenda política para invertir el proceso actual y avanzar hacia la sostenibilidad construyendo colectivamente ciudades que se caractericen por ser:

Complejas, donde los usos residenciales convivan con los productivos, comerciales y de ocio de proximidad, reduciendo las distancias y por tanto la necesidad de desplazamientos obligados, habilitando así los modos de transporte alternativos al vehículo privado, como caminar o ir en bicicleta.

Compactas, donde la actual expansión desordenada se sustituye por áreas urbanas densas, que maximizan la eficiencia de las infraestructuras públicas, posibilitan el transporte colectivo de calidad y competitivo respecto al automóvil privado, y reducen la emisión de residuos fuera del sistema, para posibilitar el cierre de los ciclos del metabolismo urbano.

Cohesionadas, en las que los nuevos derechos urbanos —a la vivienda, al espacio público y los equipamientos, a la accesibilidad, a un medio ambiente saludable, a la identidad

colectiva y el sentimiento de pertenencia— están garantizados para toda la ciudadanía, con barrios vibrantes y vivos, donde convive la mayor diversidad posible en términos de nivel de renta, de estudios, procedencia, edad, etc.

Participativas, de manera que vecinos y vecinas pasan de ser sujetos pasivos a tomar parte activa en las decisiones que dan forma a su entorno cotidiano y configuran el modelo de ciudad en el que quieren vivir. Transparencia y participación como mejores antídotos contra la corrupción y garantías de la prevalencia del interés común sobre los intereses especulativos particulares.



Biodiversidad: decálogo de los retos en su protección

Área de Medio Ambiente, Ecología y Sostenibilidad

DECÁLOGO DE PODEMOS PARA LA PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

- 1.** Inclusión de la variable biodiversidad en el diseño y evaluación de todas las políticas públicas relacionadas. Deben parar las subvenciones perjudiciales para la biodiversidad, como determinadas actuaciones de la Política Agraria Común (PAC). También el urbanismo con su claro ejemplo en la política de costas o las infraestructuras debe incluir la variable de protección de la biodiversidad. Deben darse pasos para la interconexión de la fauna o el diseño de infraestructuras con menor impacto sobre determinados ecosistemas con mayor diversidad; y quitarse las vallas cinegenéticas.
- 2.** Responsabilidad de la Administración en la conservación de la biodiversidad. Utilización de productos de agricultura ecológica en todos los comedores de la Administración dentro de la compra verde.
- 3.** Tomar decisiones basadas en la mejor ciencia disponible. Aumento de investigación sobre invertebrados y el estado de las especies de peces, para el descubrimiento de otros grupos aún sin identificar, etc. Así como sobre las causas del declive de las abejas y otros grupos de vital importancia y teniendo presente el uso del glifosato y otros plaguicidas.
- 4.** Protección de las especies emblemáticas y claves para los ecosistemas como el lobo, el oso o el lince.
- 5.** Implicación de las empresas en la conservación de la biodiversidad.
- 6.** Planificación y ordenación en todos los ecosistemas forestales para que no ardan todos los años de una forma descontrolada. Realización de una planificación adecuada en todas las superficies protegidas. Aumento de zonas protegidas en comunidades autónomas con escasas superficies protegidas (como Galicia).
- 7.** Actuaciones para detener la despoblación rural, ya que es una grave amenaza para la biodiversidad y la PAC no lo contempla adecuadamente. El abandono rural y de la ganadería extensiva es catastrófico para el mantenimiento de la biodiversidad.
- 8.** Las ciudades deben incluir la biodiversidad en todos sus vectores, deben diseñarse azoteas con plantas, fachadas verdes, láminas de agua, nidos, etc.
- 9.** Como ciudadanos debemos realizar actuaciones diarias que mejoren la biodiversidad, evitar vertidos de aceites usados o productos tóxicos, consumir productos con el menor impacto posible, como alimentos de agricultura ecológica, productos naturales, evitar incendios, y apoyar las opciones políticas que más protejan la conservación de especies.
- 10.** Una nueva política de conservación debe incluir grandes cinturones verdes en el Mediterráneo o el Atlántico, en los cursos de los ríos, en la costa... y una mayor protección de los procesos (agua, cambio climático, biodiversidad) más que de las especies o los espacios.

Principal reto de la educación ambiental

Esther López

Responsable del Área de Medio Ambiente del Consejo Ciudadano de la Comunitat Valenciana

M.^a del Carmen Romero

Responsable del Área de Medio Ambiente, Ecología y Sostenibilidad del Consejo Ciudadano Estatal

«La meta de la educación ambiental es formar una población consciente y preocupada por el medio y por los problemas relativos a él; una población que tenga los conocimientos, las competencias, la predisposición, la motivación y el sentido de compromiso que le permita trabajar individual y colectivamente en la resolución de los problemas actuales y en que no se vuelvan a plantear».

UNESCO
Conferencia de Belgrado (1975)

Desde 1975 la educación ambiental ha supuesto la base para conseguir cambios individuales y colectivos en torno a la conservación del planeta y la construcción de un futuro sostenible para todos y todas, pero aún no se ha conseguido exprimir al máximo como herramienta que proporcione el salto de la concienciación a la acción.

En la actualidad nos encontramos frente a una situación de emergencia socioambiental sin precedentes. Cada día son más acusadas las crisis sociales, ambientales y económicas por las que está pasando el planeta y sus habitantes. Estas crisis implican el establecimiento de un caos y desorden que cada vez se muestra con mayor dureza en los temas ambientales y

lo vemos reflejado en la crudeza del cambio climático, la escasez de agua, la crisis energética o la contaminación.

La separación entre naturaleza y cultura, impuesta por una dominación del capital económico, ha llegado a su culmen al reflejar claramente la desprogramación de nuestra cultura en cuanto a formas de colaboración social y de relacionarnos con la naturaleza que ya tenían adquiridas nuestros antepasados y potenciando el individualismo y capacidad de supervivencia de cada individuo por su cuenta y riesgo.

Nuestra sociedad posee en muchos ámbitos formas extremadamente rígidas en su organización, pensadas para el ciudadano como receptor no como parte activa de la sociedad. Esto nos impide identificar y cubrir nuestras necesidades reales, individuales y colectivas, que nos permitan una adaptación a los cambios que percibimos. Aquí es donde entra el papel fundamental de la educación ambiental en su capacidad para hacer que todos los ciudadanos interioricemos el concepto de medio ambiente, de la conservación de la naturaleza, de nuestro único hogar. Los ciudadanos necesitamos poder estar más en contacto con los espacios naturales, valorar la biodiversidad y los servicios que nos proporcionan los ecosistemas y sus habitantes. Todo ello forma parte de nuestro medio ambiente, algo que es parte de todos, nos involucra a todos y por tanto nos invita a participar de forma colaborativa e individual en programas y proyectos que incidan positivamente en la sociedad y en nuestro entorno.

Así pues nos encontramos ante el gran reto de aprender a formar parte de una so-



ciedad que se adapte y evolucione hacia modelos de convivencia y desarrollo más sostenibles y respetuosos, menos contaminantes, que posibilite vivir en ciudades y municipios más sostenibles, con menos contaminación atmosférica, mayor eficiencia energética e hídrica y mayor responsabilidad en la gestión de residuos. Para ello, se hace indispensable identificarnos como parte de y no como algo ajeno a nuestro planeta, los principales objetivos radican ahí en crear esa conciencia e integrar la educación ambiental como algo necesario para poder cambiar de forma colectiva, enfocando hacia actuaciones que promuevan el bien común.

La educación ambiental nos ayuda también a acercarnos a la naturaleza de forma consciente, abrir nuestros sentidos y empatizar con la tierra. El déficit cultural y formativo so-

bre la relevancia de la naturaleza para nuestra supervivencia nos aleja de la sensación de ser parte del reto más importante que cambiará nuestra forma de ser y estar en el mundo.

MUNDO RURAL

Artículos de opinión



Nuevos tiempos de salitre y olas

Estefanía Torres

Eurodiputada de Podemos y miembro del ENVI (Comisión de Medio Ambiente,
Salud Pública y Seguridad Alimentaria)

Se dice que los mercados de Madrid tienen el mejor pescado de España. Las lógicas del comercio puede que den sentido a la frase de los restauradores del foro, pero poca duda cabe de que el mejor pescado de España no se pesca en Madrid. Es muy necesario recordar esta incoherencia porque la regulación de la pesca sí procede administrativamente de burocracias sin mar, sin la cultura del salitre y las olas: Madrid y Bruselas.

Esta imagen poética es fundamental para indagar en la arqueología de un problema que tenemos en este país con nuestras costas y con las gentes de la mar y, en general, con el sector primario. Son innumerables los inconvenientes que padecen nuestros campos, costas y mares, que agonizan por las esquinas de los ministerios indolentes de la capital del reino.

¿Por qué nuestros pescadores, nuestras mariscadoras, aquellos y aquellas que ponen en nuestros platos esa proteína de alto valor y apreciado consumo son los grandes olvidados de una cadena productiva? ¿Por qué, como en otros eslabones del sector primario, son quienes menos deciden sobre las políticas que les afectan y regulan su trabajo día a día? ¿Qué es lo que nos ha llevado a que sea más usual encontrar en el menú de nuestros hijos e hijas en el colegio, o de nuestro familiar en el hospital, o en la estantería lineal del supermercado, una carne que no reconocemos porque no la tenemos en la memoria, llámese panga, tilapia o perca del Nilo?

Para esto no hay una justificación estrictamente económica. Nuestros pescadores llevan hasta las rulas pescados frescos a precios inferiores a estos otros productos industriales. Es la resultante de otra lógica: la simplificada por las grandes maquinarias de producción/distribución que optimizan precios concentrando productores y consumidores (en los supermercados) en el tiempo y el espacio.

Una lógica perversa que desprecia los mercados de proximidad y las rulas, que despre-

cia, en fin, el compromiso cotidiano de los pequeños productores con su trabajo. Lógica que, además, viene siendo apoyada de manera sistemática por la gestión de unos Gobiernos, como en tantos otros sectores, plegados a los intereses de los «grandes» empresarios corporativos-financieros que necesitan pescado pero no pescadores. Como consecuencia, la gente de la mar acaba reducida y marginada. Si permanecemos en el inmovilismo, al final serán las élites oligárquicas, conocedoras del valor del producto de la pesca artesanal, las que pagarán como a criados de lujo a los últimos pescadores de siempre.

A grandes rasgos y en trazo grueso: nos quieren convencer de que lo «pequeño» no es viable en los esquemas neoliberales. Por el contrario, es molesto y farragoso por disperso. Mientras que «lo grande» optimiza los beneficios. Y esta es la lógica perversa que opera en nuestro país y en el mundo. Ningunear hasta el exterminio final a las gentes del sector primario, pequeños y medianos productores de la pesca, la agricultura y la ganadería.

Frente a ello, nuestro proyecto debe apostar por el desarrollo de las capacidades propias de las tierras y los mares y de quienes los trabajan, debe construir soberanías (alimentarias, energéticas, vitales, populares). Necesitamos dejar de ser meros consumidores y volver a ser ciudadanos. Toca replantear un modelo en el que nuestro pueblo disponga de alimentos sanos y sostenibles, poniendo a nuestros productores y productoras por delante del beneficio extremo de las élites económicas.

Precisamos que las gentes del campo y la mar sean también parte del cambio para estar en condiciones reales de construir un nuevo país cuyo eje principal sea un guión de las y para las mayorías. Este es el camino que debemos (y, además, nos urge) andar en común. El único modo de alcanzar un mundo en donde quepamos todas y todos.

La Ley de Desarrollo Sostenible para el mundo rural. Un marco legislativo necesario para emprender transformaciones largamente postergadas, que cuente con el apoyo de los principales actores del mundo rural

Ariel Jerez

Consejero estatal coordinador del Consejo del Mundo Rural y Marino de Podemos

En diciembre de 2007 se aprobó la Ley 45/2007, para el desarrollo sostenible del medio rural. Elaborada con ilusión por algunos profesores y funcionarios progresistas ligados al Ministerio de Medio Ambiente, a pesar de avanzar en su implementación en su primera fase, fue abandonada en el contexto de crisis. En una malograda unificación departamental que en tres años vio pasar tres titulares (Narbona, Espinosa, Aguilar), el resultante Ministerio de Medio Ambiente, Mundo Rural y Marino cejó de cualquier esfuerzo presupuestario sostenido para garantizar su desarrollo. Justo en el periodo que más falta hacía pensar estratégicamente su futuro, se iniciaba una intensa política de recortes en inversiones y servicios que hasta hoy hacen retroceder los derechos de la población rural.

Era una ley hecha para beneficiar potencialmente a más de 10 millones de habitantes, en especial a los de los municipios rurales más desfavorecidos, con una media de edad superior a la media española, con más de un 50% de paro juvenil y bajo nivel de cobertura de los servicios públicos básicos. Y a zonas que baten los records de despoblación de Europa, fenómeno que si no atajamos pronto puede tener nefastos resultados sobre nuestras políticas de ordenación territorial y el control sobre nuestros recursos naturales cada vez más codiciados por poderes

corporativos transnacionalizados (empezando por el acceso a la propia tierra de cultivo).

La ley también promueve un desarrollo rural participativo, implicando en la toma de decisiones a todos los actores del territorio, contribuyendo a la construcción de un desarrollo rural de abajo hacia arriba. Establece 105 zonas rurales prioritarias en la que los agentes sociales y económicos tienen posibilidad de incidir en la elaboración de estos planes que hacen efectivo su desarrollo. Trabaja sobre 5 ejes concretos largamente demandados por los especialistas y los actores más avanzados del mundo rural: 1. Fomento de la actividad y diversificación económica y el empleo; 2. Infraestructuras y equipamientos básicos; 3. Servicios y bienestar social; 4. Conservación del medio ambiente y 5. Formación y dinamización social.

Esta ley también puso encima de la mesa, como retos centrales de su estrategia, dos problemas hasta el momento postergados. Por un lado, el problema de la despoblación, tomando iniciativas concretas para intentar frenarla con planes específicos en los municipios de 1000 a 5000 habitantes, además de un mejoramiento general en la prestación de servicios que implicaba coordinar la «ruralización» en la mayoría de los departamentos ministeriales (sanidad, educación, vivienda, administraciones públicas, fomento, obras públicas, cultura). Por otro, también buscaba impulsar la sostenibilidad aprovechando la transversalización promovida por el entramado normativo y político europeo. Tanto los pilares agropecuarios y de desarrollo rural específico de la Política Agraria Común como la de protección ambiental y de la biodiversidad, escasamente integrados hasta el momento.

Desde el punto presupuestario intentaba activar la optimización de recursos con una ordenación territorial que promueve la comarcalización para tratar de superar deficiencias en las fronteras muchas veces en exceso artificiales entre provincias y comunidades autónomas, así como exigía la colaboración política y financiera para repartir al 50 % la carga presupuestaria entre Administración central y autonómicas.

Es una ley ambiciosa sin duda, compleja en su articulación. Pero porque sus objetivos

transformadores son ambiciosos cuenta con un amplio apoyo social, en la medida en que pone palancas participativas para remover inercias y lastres derivados de las dinámicas caciquiles y clientelares que han pervivido en el mundo rural. Ya se reflejó en la votación en el Congreso: 171 diputados votaron a favor (PSOE, ERC, IU-ICV, CHA, CC), frente a 124 que lo hicieron en contra (PP y el foralismo vasco PNV y EA). CiU y BNG se abstendrían junto a las también llamativas 44 ausencias (mayoritariamente conservadoras). Pero en las siguientes legislaturas las fuerzas parlamentarias no han mostrado mayor interés en la problemática, y la crisis volvió a postergar el mundo rural con otra década perdida.

Con la aparición de Podemos, la puesta en marcha, actualización y mejora de esta ley es una reivindicación central de nuestros círculos temáticos (Celtiberia y AGPA). Y que goza de un amplio apoyo lo confirmamos a lo largo de nuestro proceso programático, en las muchas reuniones mantenidas con los diversos sindicatos agrarios, entidades ruralistas y ecologistas. Y lo volvimos a confirmar en las jornadas sobre «Retos y perspectivas en la aplicación de la Ley de Desarrollo Sostenible para el Mundo Rural», que organizamos en el Congreso de Diputados el pasado marzo. Estamos en condiciones de conformar una coalición social amplia que dé apoyo a un proyecto que necesita conciliar culturas rurales y urbanas hoy mutuamente negadas, para que sostenibilidades sociales, ambientales y democráticas se conjuguen con soberanías alimentarias, energéticas y populares dentro del proceso de cambio que ha abierto Podemos.



Tierra para la vida. Tierra para quien la trabaja

Fernando Fernández

Miembro del Consejo Editorial de la revista *Soberanía Alimentaria* y asesor del CMRM y el GP de Podemos en el Congreso

La tierra ha sido y es uno de los factores que más ha movilizado a los pueblos a lo largo de la historia. La lucha y resistencia de los campesinos y campesinas por la tierra sigue siendo una constante desde Honduras a Brasil, desde Filipinas a la India y desde Palestina hasta Mozambique, y es que la tierra no es un simple bien patrimonial, sino que representa una construcción social sobre la que las familias campesinas construyen un modelo de vida y un modo de ser y hacer en el mundo. Lejos de considerarlo como un reclamo propio de otros pueblos, esta demanda se hace presente también en las reivindicaciones de las organizaciones agrarias europeas y españolas, y es que en Europa, según datos de EUROSTAT de 2012, el 3 % de las explotaciones agrarias controlan el 51 % de la tierra mientras que el 81% de los pequeños agricultores y agricultoras poseen tan solo el 14,7 % de la tierra agraria. Esta realidad de concentración de la tierra en pocas manos aumenta, y así, en los últimos 10 años, los pequeños agricultores y agricultoras han perdido el control sobre el 17% de las tierras europeas. En España la agricultura familiar ha pasado de controlar el 15 % de la tierra a tan solo el 7 %. En los últimos 10 años han desaparecido 989.796 explotaciones agrarias, es decir, 82 explotaciones por día. La falta de unas relaciones justas de intercambio en el seno de la cadena de valor, la competencia por los usos del suelo primando la explotación minera, energética, turística o inmobiliaria frente a la agricultura, la especulación ligada a la inversión sobre la tierra, el acaparamiento de tierra por parte de grandes agroindustrias, la amenaza constante de grandes infraestructuras de comunicación que no siempre responden a intereses generales, o la orientación productiva hacia los monocultivos son algunas de las amenazas que pesan sobre la agricultura familiar y

social. Pero no podemos olvidar que vivimos en un país donde la injusticia estructural sobre la propiedad de la tierra persiste desde tiempo inmemorial y es que 1.097 fincas poseen el doble de tierra que las 503.082 explotaciones agrarias más pequeñas. Detrás de esta injusta distribución de la tierra hay nombres propios que siguen resonando, como Juan Abelló (que posee más de 58.000 ha de tierra), la Casa de Alba (con más de 34.000 ha), Mora-Figueroa y Domecq (con más de 25.000 ha), José María Aristrain (con más de 28.000 ha), la familia Botín (con tierras que superan las 25.000 ha). Todas estas propiedades permanecen ocultas bajo sociedades mercantiles y todas ellas reciben ayudas de la PAC (que alcanzan los 2,9 millones de euros al año, como es el caso de la ayuda que recibe la Casa de Alba), y es que es evidente que la Política Agraria Común, con su lógica, consolida la propiedad de la tierra al adjudicar una renta fija tan solo por ser propietario. Los datos hablan por sí mismos y revelan una situación radicalmente injusta que es necesario abordar. Urge volver a situar la tierra dentro de la agenda política agraria. Necesitamos una política de tierras acorde con una nueva política agraria que favorezca y apoye un modelo productivo social y sostenible, que ponga en valor la tierra como bien común al servicio de la sociedad para producir alimentos saludables y hacerlo de manera sostenible. Las propuestas políticas son creativas e innovadoras y conectan con una parte de la sociedad rural y urbana que pretende que los pueblos sean espacios de vida para construir futuro. Proteger el suelo agrícola con figuras como los parques agrarios o las redes de custodia del territorio, poner en marcha una acción protectora sobre el patrimonio agrario público, desarrollar experiencias como bancos o fondos de tierra, revisar los tipos contractuales para que favorezcan al poseedor y no al propietario, aplicar una fiscalidad adecuada a la gran propiedad latifundista, reorientar las ayudas de la PAC hacia las pequeñas explotaciones y poner un límite máximo de ayudas que se puedan percibir, modular las ayudas con criterios sociales y ambientales... es decir, hacer política sobre la tierra para poner el bien al servicio del pueblo.

Necesitamos establos, pero también pastores. La ganadería extensiva es una herramienta fundamental para el mantenimiento de la población rural y una política de sostenibilidad territorial y ambiental

Concha Salguero

Miembro de la Plataforma por la Ganadería Extensiva y el Pastoralismo

Estamos en un momento en el que la ciudadanía está tomando progresiva conciencia de problemas de sostenibilidad que necesitan soluciones inmediatas. De hecho, estamos obligados a repensar cómo manejamos nuestros recursos naturales y económicos, y el sector ganadero no se puede quedar atrás. En este contexto, es fundamental apoyar la ganadería extensiva, que proporciona mayores bienes y servicios públicos que el modelo de ganadería intensiva y estabulada, hoy predominante. Resulta imprescindible cambiar la desproporción hoy existente entre ambas y potenciar la que tiene un mejor comportamiento ambiental.

¿En qué se diferencian? La ganadería intensiva se realiza en instalaciones cerradas donde se hacinan la mayor cantidad posible de cabezas de ganado, al que se alimenta con piensos industriales para maximizar el beneficio económico. Este tratamiento exige la aplicación de una amplia variedad de productos veterinarios y produce emisiones y desechos contaminantes. En contraposición, en la tradicional ganadería extensiva el ganado vive en espacios abiertos y se alimenta sobre todo de pastos naturales. Es por ello el sistema más eficiente, al aprovechar los recursos del territorio, especialmente con razas autóctonas. Es, pues, un modelo que permite compatibilizar producción saludable y sostenibilidad.

Hoy la ganadería extensiva tiene dos problemas. Por un lado, un casi total abandono por parte de las políticas públicas; por otro, la dificultad de obtener un rendimiento económico suficiente. Apoyar esta modalidad es fundamental por motivos de peso: genera productos de muy alta calidad; crea paisaje y conserva biodiversidad; previene incendios al reducir el combustible de los montes, contribuye al secuestro de carbono y, sobre todo, fija población en las zonas rurales asoladas por la despoblación. Se considera, además, la forma más ética de gestión del ganado.

La ganadería extensiva y el pastoreo permiten mantener el tejido social en zonas donde, debido a las dificultades derivadas del propio medio, no son posibles otras iniciativas productivas. Se trata, pues, de una herramienta estratégica para recuperar la población rural, debido no solo a sus múltiples beneficios, sino también por ser menos dependiente de recursos externos, como combustible y piensos. El modelo agroindustrial hoy hegemónico no sabe, o no quiere, aprovechar este recurso, haciendo desaparecer paulatinamente las pequeñas explotaciones familiares. En diversos países de la UE se potencia su mantenimiento y desarrollo, mediante políticas de apoyo y adaptaciones de normativa higiénico-sanitaria que permite una mayor cercanía a sus consumidores, aplicando una voluntad política de contener las posiciones de dominio abusivas en la cadena alimentaria (como sucede hoy, con ventas de leche por debajo de su precio de coste) y con políticas rurales y territoriales en las que participa su propia población, ganaderos incluidos. La ganadería extensiva es hoy una herramienta de retroinnovación y saber aprovecharla, un síntoma de inteligencia social.



Cadena y calidad alimentaria.

Aumenta la conciencia acerca de cómo la alimentación industrial afecta a la salud pública y la ciudadanía puede y debe usar los recursos públicos para defenderla

Alejandro Moruno Danzi

Nutricionista colaborador en el Consejo del Mundo Rural y Marino de Podemos

Es cierto, que desde que se industrializó la producción de alimentos y se mejoraron los métodos de conservación, tenemos una superabundancia de productos alimentarios (que no alimentos en todos los casos), al menos en una parte del mundo, nunca conocida antes en la historia.

Pero también es cierto que este modelo global de producción y comercialización alimentarias no han supuesto una mejora de la salud pública a largo plazo; mientras en las sociedades más desfavorecidas sufren hambre y desnutrición por falta de acceso a esta producción global, en otras se sufre, sobre todo entre los más pobres, una epidemia de obesidad y enfermedades relacionadas directamente con una mala alimentación, como la diabetes tipo 2, que cada vez afecta a más gente, y a más temprana edad.

El sufrimiento y el gasto público que suponen estas nuevas epidemias relacionadas con la mala alimentación se podrían minimizar implementando educación nutricional en colegios, prevención en sanidad y apoyo institucional a la compra pública de alimentos locales, frescos y saludables para los comedores escolares (mejor calidad y más barato que el catering). También se hace necesaria otra voluntad política que regule la publicidad y la fiscalidad de la comida basura, sobre todo la dirigida a niños.

Pero, además, para poder tener acceso a una alimentación más saludable y sostenible, lo cual debería ser una necesidad hoy en día, no un privilegio, es imprescindible recuperar nuestro medio rural, dotándolo de las infraestructuras básicas que afiancen un nuevo tejido social en el campo y de una legislación que permita transitar en el medio plazo hacia el modelo agroecológico.

Actualmente, el envejecimiento de la población rural y la ausencia de renovación generacional, junto a la falta de apoyo institucional, provoca una enorme concentración agraria, dejando nuestro campo en manos de unas pocas megacorporaciones de la industria alimentaria y grandes distribuidores.

Eso se traduce en una pérdida de biodiversidad, como ocurre en EEUU, donde más del 50 % del suelo cultivado se dedica a maíz y soja, y menos de un 2 % se dedica a frutas y verduras. O en Argentina, donde se dedica el 60 % de la tierra cultivada al monocultivo intensivo de soja, utilizado en la fabricación de piensos para la ganadería intensiva industrial de todo el mundo.

Este modelo genera una oferta de productos comestibles ultraprocesados y baratos que viajan por todo el mundo, lo cual tiene un alto impacto, tanto en el medio ambiente como en nuestra salud, haciéndolo insostenible a largo plazo.



Propósitos de nuestros representantes en las instituciones



David Martínez Pablo
Diputado Podem Balears

A Balears, l'aprobació de l'impost turístic sostenible farà que els impactes negatius del turisme es compensin amb projectes mediambientals



Andoni Corrales
Diputado Podemos Aragón

Por el medio ambiente y los pueblos. Los incendios se apagan en invierno



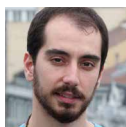
Paula Valero
Diputada Podemos Asturias

Un mundo rural vivo para garantizar la soberanía alimentaria de nuestros pueblos con políticas de apoyo al consumo responsable en cercanía



Verónica Ordoñez
Diputada Podemos Cantabria

En Cantabria lo tenemos claro: queremos un futuro libre de *fracking* acompañado de un modelo energético basado en las renovables y en el autoconsumo



Héctor Piernavieja Cachero
Diputado Podemos Asturias

Na Universidá aprendí más que Bioloxía y el respetu al Mediu Ambiente, aprendí a organizame cola mayoría pa defender los intereses de toos y toes



Irene De Miguel
Diputado Podemos Extremadura

Extremadura posee una riqueza medioambiental asombrosa, conjugar su conservación con el desarrollo económico es todo un reto por el que merece la pena luchar



María Giménez
Diputada Podemos Murcia

En Murcia la protección del litoral y del medio marino es inaplazable tras 20 años de desarrollo urbanístico depredador. Es hora de poner los recursos naturales al servicio de la gente [#SalvemosElMarMenor](#)



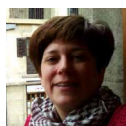
Sandra Espeja
Consellera ejecutiva de medio ambiente del Consell de Mallorca

Poniendo el medio ambiente como prioridad del bien común. La tierra para quien la trabaja, los caminos para quien los camina, las instituciones para y por la gente



Alejandro Sánchez
Diputado Podemos Madrid

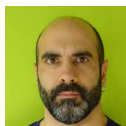
Luchamos por políticas que hagan más habitables nuestros pueblos y ciudades y protejan el territorio y el patrimonio natural de la especulación



Saioa Castañeda
Podemos Euskadi

Trabajemos desde lo local, con conciencia ambiental, para cambiar lo global y evitar la desigualdad social. Recuperemos lo que nunca debió sernos arrebatado

Propósitos de nuestros representantes en las instituciones



Ricardo López
Diputado de Podemos Castilla y León

Apostamos por nuestros ecosistemas, la economía con empleos verdes, la agricultura ecológica [#ContraElCambioClimático](#) [#Sostenibilidad](#)



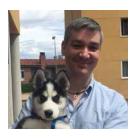
Juantxo Uralde
Diputado de Podemos

No hay mayor cambio que reconocer que somos parte de la Tierra, y actuar en consecuencia



Estefanía Torres
Diputada de Podemos en el Parlamento Europeo

Defender el campo y la mar es defender la riqueza, la dignidad y la soberanía alimentaria de nuestro pueblo



Germán Cantabrana
Diputado de Podemos La Rioja

La energía verde dejará a nuestros hijos una tierra limpia y con grandes oportunidades económicas. En la defensa del medio ambiente no debe haber fisuras



Mercedes Barranco
Diputada de Podemos Andalucía

Raíz de toda esencia viva, inspiradora y armoniosa, la tierra se funde en el equilibrio perfecto del caos ordenado para recordarnos que solo somos un granito de mineral en sus manos



Rosa Martínez
Diputada de Podemos

Cualquier día es bueno para que nuestras políticas hagan de la Tierra el lugar que nunca debió dejar de ser



Carmen Molina
Diputada de Podemos Andalucía

«La única razón para la esperanza son las mujeres y los hombres empeñados en crear, con grandes esfuerzos y mucha imaginación, un mundo sin miedos y con corazón» (Petra K. Kelly)



Jorge Luis Bail
Diputado de Podemos

Tenemos el reto y la oportunidad de poner nuestra conciencia a la misma altura que el impacto de nuestras acciones



M.ª del Carmen García
Diputada de Podemos Andalucía

Entender la tierra como dadora de vida, nutricia, que ofrece raíces, pertenencia e identidad propia



Marta Domínguez
Diputada de Podemos

Ante nosotros tenemos la posibilidad de aunar esfuerzos y proporcionar un futuro sostenible para nuestros hijos e hijas. Juntos Podemos